INDICACIONES PROYECTO DE LEY ALTERACIÓN DE LA PAZ PÚBLICA,
BOLETÍN N° 13.090-25

- 1) En el artículo único, número 1, sustituir los incisos primero y segundo del nuevo artículo 268 septies por los siguientes:

“ El que realice un acto constitutivo de desorden público grave, será sancionado con reclusión menor en su grado medio.

Para estos efectos, constituye desorden público grave:”

Fundamentos.

El fundamento de la indicación consiste en precisar de mejor forma la vinculación entre la alteración del orden público y el carácter violento de la conducta sancionada, de forma de proteger el derecho de las personas para manifestarse pacíficamente. En efecto, si se quiere sancionar conductas que constituyan delitos que alteren el orden público, entonces, el elemento de alteración del orden público debe estar asociado a la descripción de la conducta. Por lo tanto, lo que corresponde es precisar correctamente las hipótesis específicas de realización del delito de desorden público con alteración de la paz pública. En cambio, el proyecto simplemente se limita a vincular la conducta a la alteración del orden público, mediante una cláusula general, contenida en el encabezado del artículo 268 septies, que señala lo siguiente: *“El que valiéndose de una manifestación o reunión pública tomare parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público”*.

Los términos en que se establece la cláusula general, son vagos e imprecisos. La norma opta por utilizar la expresión *“valiéndose”*, para dar cuenta que la persona no necesariamente debe estar realizando un acto específico de alteración del orden público, sino que basta que actúe con ocasión de éste. Esto facilita la detención de personas que son identificadas arbitrariamente por el personal policial, al interior de una institución, con ello, poniendo en riesgo la libertad y seguridad de las personas. Por otra parte, la expresión tomar parte *“violenta y activamente”* no es suficientemente clara. El concepto de *“violencia”*, no es un concepto que pueda ser utilizado de forma libre por el Derecho Penal, sino que tiene un sentido jurídico-penal específico; particularmente, se encuentra asociado a la coacción mediante violencia, que constituye un medio de constreñimiento físico de la capacidad de actuar. No es claro que el proyecto lo esté utilizando en el mismo sentido, pues frases como *“incendiar objetos”* (n° 4), o *“paralizar o interrumpir un servicio público”*, difícilmente se encuadran dentro de un constreñimiento físico de la capacidad de actuar de las

personas. Por lo tanto, no es clara ni precisa la utilización del concepto de tomar parte “violenta” (mente). En cuanto al adverbio “activamente”, puede ser una expresión para dar cuenta que se prohíbe una imputación omisiva, lo que parece no ser suficiente para restringir el ámbito de la intervención por “acción” del individuo.

Por estas razones, se propone sustituir la cláusula del artículo 268 septies, inciso primer por “El que realice un acto constitutivo de desorden público grave”. Ello da cuenta de dos presupuestos: primero, no basta que la persona se “valga”, o intervenga en una acción descrita en el tipo, la persona debe realizar el acto directamente. Si la persona solamente colabora, o presta auxilio, induce, o se concierta para la realización del hecho, ello tiene que quedar entregado a las reglas de intervención delictiva propias de la autoría y participación de los artículos 15 y 16 del Código Penal. Por otra parte, la utilización del concepto “desorden público grave”, se utiliza para diferenciarlo de los otros desórdenes públicos que se encuentran contenidos en los párrafos siguientes.

2) En el artículo único, número 1, sustituir el numero 1 del artículo 268 septies por el siguiente:

“ 1) Paralizar maliciosamente de forma permanente, un servicio público de primera necesidad, con peligro concreto y grave para la seguridad pública o el abastecimiento general de la población. Se entiende por servicio público de primera necesidad, los servicios hospitalarios de urgencia, electricidad, estaciones de transporte público, de combustible, agua potable, y telecomunicaciones.”

Fundamentos.

En primer lugar, se introduce la expresión “permanente”. Lo anterior, toda vez que, en los términos que se encuentra establecido el proyecto, basta cualquier interrupción del servicio para configurar la conducta típica. El carácter permanente, da cuenta que debe existir un cierto lapso de extensión del resultado ejecutivo, para que se configure el delito. De lo contrario, interrupciones pasajeras, como la persona que se pone en la calle para manifestarse, pasaran a constituir automáticamente delito, cuando el servicio detenido sea un bus de la locomoción pública. En segundo lugar, se introduce una cláusula de peligrosidad concreta, para la afectación de la seguridad pública o el abastecimiento general de la población. Esto da cuenta que no basta con una interrupción mínima, fugaz, o pacífica, a la prestación del servicio público, si no que esta conducta tiene que conllevar un peligro para un bien jurídico colectivo, como la seguridad pública o el abastecimiento de la población. Así, se contribuye a precisar de mejor forma la gravedad y la especificidad de la conducta. Además se

establece que esta conducta requiere de dolo directo, de manera tal de precisar aun más el supuesto a partir del cual se quiere castigar como delito estas conductas, sin que se criminalice por esta vía las legítimas protestas sociales que se pueden desarrollar en el contexto de una democracia en forma. Finalmente se precisa el concepto de servicio público para los efectos de la norma, restringiéndolo a servicios hospitalarios de urgencia, a fin de no criminalizar la protesta de quienes son funcionarios de un servicio de salud, para citar un ejemplo.

- 3) En el artículo único, número 1, sustituir el número 2 del artículo 268 septies por el siguiente:

“ 2) Tirar piedras u otros objetos arrojados en parajes públicos, o arrojar escombros u objetos punzantes o cortantes en lugares públicos, con riesgo grave y concreto para la integridad física de los transeúntes, o con peligro grave para la seguridad de las personas. En caso de que no exista riesgo grave para la integridad física de transeúntes o peligro grave para la seguridad de las personas, se estará a lo dispuesto en los artículos 496 N° 21, 25 o 26, según sea el caso”.

Fundamentos.

La indicación busca establecer una correspondencia entre las figuras vigentes en nuestra legislación, que ya sancionan la conducta de arrojar objetos, piedras u otros objetos con peligro para las personas, y la necesidad de establecer penalidades mayores por este tipo de conductas. En efecto, actualmente éste tipo de conductas se encuentra expresa y completamente reguladas por las faltas establecidas en los artículos 496 N° 21, 25 o 26 del Código Penal. Por consiguiente, bastaría con justificar la incorporación de una nueva figura en el presente proyecto actual. La indicación busca precisamente esto, conservando la redacción de esas figuras, pero clarificando que se requiere un peligro grave y concreto, para que pueda recibir la penalidad correspondiente al delito de desorden público. En caso de que no exista peligro grave, se establece un reenvío a las faltas establecidas en los artículos 496 N° 21, 25 y 26 del Código Penal.

- 4) En el artículo único, número 1, para eliminar el número 4 del artículo 268 septies.

Fundamentos.

La indicación busca asegurar los principios de proporcionalidad, *última ratio* y tipicidad que debería cumplir el proyecto. En la actualidad, el proyecto contempla en el N° 4 la figura de *“incendiar objetos o utilizar*

elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos". Debe clarificarse que lo sancionado acá no es la amenaza, o la afectación de la libertad de las personas. Lo que se está sancionando es exclusivamente, la colocación de objetos incendiados en la vía públicas, es decir, las barricadas. El carácter coactivo, según la norma, se establece respecto al objeto, no respecto a la acción de la persona. Por consiguiente, no existe ninguna exigencia relativa a la gravedad de la conducta que amerite consagrar ésta disposición. Considerar que la colocación de las barricadas constituye un delito, con la penalidad que establece éste proyecto, debe ser rechazado, considerando que ésta será una vía para criminalizar formas de protesta que no provocan riesgo para la vida de las personas necesariamente, y que en muchos casos se tratará de conductas de muy escasa gravedad y peligrosidad para el resto de la población. No puede ser que el proyecto pretenda castigar una barricada con penas superiores a la del soborno, cohecho y gran parte del catalogo de delitos de "cuello y corbata". En cualquier caso, cabe destacar que **hoy las barricadas se pueden sancionar penalmente en casos graves, a través de la figura del artículo 269 del Código Penal.**

- 5) En el artículo único, número 1, para sustituir el numeral 5 del artículo 268 septies, por lo siguiente:

"Impedir, o dificultar de forma grave y maliciosa con perjuicio a las personas, la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas."

Fundamentos.

El actual número 5 del artículo 268 bis establece como delito "Impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas." Éste delito, es prácticamente, idéntico al ya existente en el artículo 269 del Código Penal, que sanciona con presidio menor en su grado mínimo a medio, "el que impidiere o dificultare la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las persona".

Tratándose de figuras prácticamente idénticas, no es razonable que se incorpore nuevamente en éste proyecto, como si se tratase de un delito nuevo, salvo para elevar la penalidad. Por eso se propone agregar como

elementos del tipo que se trate de una actuación maliciosa y grave, y que haya tenido como resultado un perjuicio a las personas, de manera tal de distinguirla en su gravedad de la figura que ya se encuentra incorporado en nuestro Código Penal.

- 6) En el artículo único, número 1, sustituir el numeral 6 del artículo 268 septies, por el siguiente:

“6) Usurpar bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean éstos públicos o privados, cuando la usurpación sea realizada en un contexto de grave alteración del orden público o de calamidad pública, por una persona que no se desempeñe o preste funciones o servicios al interior del respectivo establecimiento industrial, comercial o agrícola.”

Fundamentos.

La indicación propone, en primer lugar, eliminar el verbo rector “ocupar”, por su carácter indeterminado. En efecto, cualquier tipo de ocupación, pasajera de un inmueble, de acuerdo a ésta figura, sería constitutiva de delito. Lo anterior, carece de todo límite, y podría llevar a una penalización de cualquier conducta de ocupación de un inmueble, aun cuando ésta tenga un carácter accidental o pasajero, o bien, se tratara de una protesta pacífica al interior de un inmueble público. Por otra parte, en los términos que se encuentra establecida la norma, ésta disposición habilitaría a sancionar a las huelgas o paros realizados al interior de un inmueble. Esto significa, que constituiría una forma de criminalizar las protestas de trabajadores al interior de un supermercado, o una empresa, lo que no resulta razonable. Por ello, se incorpora una expresión que aclara que la disposición es aplicable sólo cuando los usurpadores son personas externas al respectivo establecimiento, es decir, cuando se trata de personas que no trabajan en el mismo, y que no tienen ninguna relación con las funciones que se prestan al interior del inmueble.

INDICACIONES AL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL PARA LIMITAR LA REELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES QUE INDICA. BOLETINES NÚMEROS 4.115-07, 4.499-07, 4.701-07, 4.891-07, 7.888-07 Y 8.221-07, REFUNDIDOS.

1. En el número 1 del artículo único del proyecto, agréguese después del punto (.) ubicado a continuación de la expresión ***“dos periodos”*** lo siguiente: ***“Esta limitación no será aplicable a los senadores y diputados que hayan sido elegidos como independientes fuera de una lista de partido político o pacto electoral.”***

Fundamento.

Para justificar el límite a la reelección de ciertas autoridades que se establece en el presente proyecto de reforma constitucional, habitualmente se sostiene que tal medida responde a la necesidad de buscar una renovación efectiva en los cargos de elección popular, donde materialmente se generan dinámicas que facilitan la posición de quienes son incumbentes, con lo cual se afectaría el sistema representativo. De esta manera, se afirma que en la práctica, sería muy difícil que candidatos que pretendan acceder a un cargo de dicha naturaleza puedan competir en igualdad de condiciones frente a una persona que lleva varios periodos consecutivos ejerciendo el cargo que se disputa, ya que el propio desempeño de tal posición le permite establecer y mantener redes, además de presentarse permanentemente asociado al respectivo cargo, con lo cual resultaría muy complejo para un retador ser electo, especialmente si se considera el breve periodo de campaña que establece nuestra legislación vigente. Esto se hace más evidente respecto de quienes cuentan con el apoyo de un partido político, quienes cuentan no sólo

con la infraestructura propia de quien ejerce un determinado cargo de elección popular, sino que además por el hecho de ser respaldados permanentemente por las estructuras de los partidos políticos que apoyaron su candidatura, las que por lo demás son entidades que recién un financiamiento estatal propio.

Sin embargo, este proyecto no considera la situación especial de quienes han sido electos como independientes fuera de una lista presentada por un partido político o un pacto electoral, quienes se encuentran en una situación de manifiesta desventaja. Lo anterior toda vez que la ley les impide formar listas, como sí se les permite a los partidos políticos, de manera tal que para ser electos deben sacar más votos que la suma de los candidatos que integran tales. Cabe destacar que la adopción del sistema D'Hondt en reemplazo del binominal, dejó a los candidatos a diputados y senadores independientes que compiten fuera de listas en una situación aun más desmejorada: antes debían ganarles a listas integradas por un máximo de dos candidatos, pero ahora deben ganarle a listas de a lo menos cuatro candidatos, según el número de cargos que se elijan en un determinado distrito o circunscripción, bajo la regla "N+1".

De esta forma, parece razonable establecer límites para la reelección de quienes ejercen ciertos cargos de elección popular, pero sin volver a castigar a los independientes que de forma excepcional han logrado ser electos como senadores o diputados fuera de listas, y a quienes se les prohíbe formarlas para los efectos de competir en un proceso electoral.

Proponemos que con la finalidad de dar una señal potente en beneficio de quienes son independientes y no están vinculados a ningún partido político, no se les aplique la restricción para ser reelectos, cuando hayan sido elegidos en sus cargos fuera de la lista de un partido político o pacto electoral. Lo anterior en un contexto donde nuestra sociedad se ha expresado de manera rotunda

exigiendo mayores espacios de participación institucional, la cual se encuentra integrada en su inmensa mayoría precisamente por independientes que se sienten alejados de los partidos políticos. De su participación efectiva en los órganos que forman parte de nuestra institucionalidad depende, hoy más que nunca, la consistencia y sustentabilidad de nuestra democracia.

2. Reemplácese el número 5 del artículo único del proyecto, por el siguiente:

“Vigésimo séptima.- Para los efectos de los límites a la reelección de las autoridades señaladas en los incisos segundo del artículo 51, se considerará su actual período como el primero, en caso que hayan sido elegidos como independientes fuera de una lista de partido político o pacto electoral.”

Fundamentos.

Se presenta esta indicación para el caso que no se considerara a través de una norma permanente, la situación de quienes se han elegido como senadores o diputados como independientes fuera de lista. En tal evento corresponde, a lo menos, reconocer la situación de desmedro con la cual fueron elegidos y la falta de apoyo de un partido político o coalición de partidos que, con su propia infraestructura y recursos, le entregan a su vez respaldo de forma permanente a quien es un incumbente elegido dentro de lista. En atención a lo anterior es que proponemos establecer que respecto de tales independientes, no se considere el periodo que actualmente ejercen para los efectos del límite a la reelección que contempla el proyecto.